



Operarios en un taller de fundición de una empresa siderúrgica. IÑAKI ANDRÉS

La industria se revuelve frente a los ‘data center’ y exige una auditoría

Las fábricas piden por escrito al Gobierno «no socializar» los sobrecostes de la IA

PAULA MARÍA MADRID
La gran industria española irrumpe en el pulso de los centros de datos. Del metal al motor pasando por la química y el azulejo, las fábricas han presentado alegaciones al proyecto de real decreto de Moncloa para limitar los *data center*. Entre las propuestas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, se incluye una auditoría de costes a los centros de datos para evitar subidas de la luz, también reclaman prioridad frente a la IA a la hora de acceder al agua y las redes eléctricas, recursos cada vez más tensionados por la irrupción de infraestructuras digitales.

Las fábricas españolas han puesto sus barbas a remojar ante el impacto que la entrada masiva de *data center* está provocando en otros países. Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos... muchos de los gobiernos que han ido por delante en el despliegue de *hubs* de procesamiento de datos se encuentran ahora limitándolos a contrarreloj, aplicando moratorias o buscando soluciones a su enorme demanda energética y su efecto sobre los precios finales y la estabilidad de la red.

Un reciente estudio en el que participaron cuatro universidades (tres estadounidenses y una de Canadá) estimó que la infraestructura di-

gital absorberá hasta un 20% del consumo eléctrico total de Estados Unidos en 2030, lo que disparará los precios de la luz un 57% en regiones saturadas—como Virginia del Norte—y encarecerá la factura media entre un 6% y un 29%. El ejemplo resuena en la industria española.

El grueso de las propuestas las ha canalizado la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por nueve asociaciones que aglutinan 4 millones de empleos, el 67% de las exportaciones industriales y el 55% del PIB industrial. Si bien, sectores como la siderurgia han alegado a mayores individualmente. La principal preocupación es que el despliegue de centros de datos dispare la factura energética de los consumidores existentes, sobre todo, la de aquellas empresas donde el precio de la luz ya mueve la aguja de la competitividad, las electrointensivas.

El Gobierno quiere exigir que el consumo de los centros de datos sea renovable en un 80% y acreditado hora a hora, y que esa energía *verde* sea generada en plantas construidas, como mucho, en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del *data center*. Con ello, Moncloa persigue que estas infraestructuras no *sequen* el sistema eléctrico acaparando la electricidad existen-

te, sino que vengán acompañadas de generación adicional. Los centros que no cumplan asumirán penalizaciones económicas.

La Alianza celebra estas medidas, pero avisa que no resuelven el impacto económico, porque incluso los centros de datos que cumplan plenamente pueden «seguir necesitando refuerzos de red, capacidad firme y servicios de ajuste por su consumo continuo y por el 20% no cubierto por la obligación renovable». Actuaciones que conllevan más costes

El motor, el acero o el azulejo piden prioridad frente a los centros de IA

Reclaman que no se «socialicen» los costes de los centros de datos

para el sistema que acabarían asumiendo todos los consumidores.

«Una vez que entren en funcionamiento será difícil determinar qué parte de las subidas de precios son

atribuibles a los centros de datos», avisan fuentes empresariales. Por ello, la industria insta al Gobierno a activar mecanismos *a priori* para evitar «socializar» los sobrecostes de la IA. ¿Cómo? Con una auditoría previa por parte del operador de la red (Red Eléctrica) que evalúe los costes asociados a cada proyecto en el momento en que solicite el permiso de conexión. Además, insta a Moncloa y a la CNMC a, en un plazo de seis meses desde la publicación del decreto, diseñar una metodología que permita cifrar el aumento de costes.

AGUA, SUELO Y REDES

La Alianza exige una «memoria hídrica» obligatoria y que los centros de datos acrediten un plan de contingencia frente a la sequía, además de que las autoridades avalen que los centros proyectados en zonas de estrés hídrico sean compatibles con los usos ya existentes.

La industria exige para los *data center* un «plan de madurez», que acredite la disponibilidad real del suelo, como condición para arrancar su tramitación. Además, las fábricas piden un pase preferente para sus proyectos de descarbonización en cuando la capacidad de la red eléctrica no permita atender todas las solicitudes de acceso.